



**AMPARO DIRECTO EN REVISION
2632/98.
JORGE VILLALOBOS TORRES.**

**MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE
ANGUIANO.
SECRETARIO: JOSE CARLOS RODRIGUEZ NAVARRO.**

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

Vo. Bo.



LA CORTE DE
DE LA NACION
DE ACUERDOS

COTEJO

**VISTOS; y,
RESULTANDO:**

PRIMERO.- Por escrito presentado el doce de marzo de mil novecientos noventa y ocho en la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, recibido el veinticuatro siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, JORGE VILLALOBOS TORRES, por su propio derecho, promovió juicio de amparo directo señalando como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:

"AUTORIDADES RESPONSABLES.- a) *Presidente de la República, b) Asamblea de Representantes del Distrito Federal y, c) La Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal".*

"ACTOS RECLAMADOS.- a) *La expedición en uso de facultades extraordinarias de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. La falta de procedimiento legislativo; b) De la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, se reclama, la falta de emisión de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y, c) De la Sexta Sala la sentencia pronunciada el veinte de febrero de mil novecientos noventa y ocho".*

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUATEMALA
SUPREMA
JUSTICIA E
REGISTRARIA DE

SEGUNDO.- Como garantías violadas en su perjuicio, la parte quejosa señaló las tuteladas por los artículos 14, 16, 103, 104 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.- Como conceptos de violación, el peticionario del amparo argumentó los siguientes:



"PRIMERO.- La sentencia recurrida en la parte que establece: 'II. El primer agravio expresado por la demandada, se refiere a la supuesta inconstitucionalidad del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, cuyo estudio y resolución le corresponde a las autoridades federales, razón por la cual esta Sala se abstiene de hacer consideraciones sobre el particular por carecer de competencia para hacerlo'.-- El criterio anterior viola mis garantías de seguridad jurídica y debido proceso legal, contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que de un análisis se advierte plenamente que para llegar a esa conclusión no externa argumento lógico jurídico que lo motive, mucho menos se refiere al fundamento que establezca ese criterio.-- Independientemente de lo anterior, las autoridades locales sí tienen facultades para dejar de aplicar leyes que a su criterio son inconstitucionales, pues deben ajustar sus procedimientos a las disposiciones de dicha Constitución Federal, a pesar de las disposiciones en contrario contrarias (sic) la Constitución Federal, las autoridades comunes deben abstenerse de aplicarlas, para ello deben externar razonamientos en que se funden. Es aplicable por analogía la siguiente tesis



CORTE DE
LA NACION.
DE ACUERDO

*jurisprudencial: 'LEYES FACULTAD DE LAS
AUTORIDADES PARA DECLARARLAS
ANTICONSTITUCIONALES. Si el quejoso en un
juicio de amparo, no demuestra que el artículo
479 de la Ley Federal del Trabajo, no es
anticonstitucional, solo sería exigible la prueba
si la cuestión planteada hubiera versado sobre
la constitucionalidad o inconstitucionalidad del
citado precepto, pero no cuando la queja se
concretó únicamente a impugnar que la Junta
de Conciliación y Arbitraje respectiva, hubiera
tenido facultad para interpretar la ley y para
dejar de aplicar ese artículo, aduciendo como
fundamento para hacerlo, que era
anticonstitucional, y si el juez de amparo
admite que la junta como encargada de aplicar
la ley y autorizada, por lo mismo, para
interpretarla, sí tuvo facultad para declarar
anticonstitucional el citado artículo 479, y para
dejar de aplicarlo por ese motivo, debe tenerse
en cuenta que, de acuerdo con lo prevenido en
el artículo 133 de la Constitución Federal, las
autoridades comunes deben ajustar sus
procedimientos a las disposiciones de dicha
Constitución Federal, a pesar de las
disposiciones en contrario que puedan existir
en otras leyes o Constituciones locales, lo que
quiere decir que tratándose de disposiciones*



manifiestamente contrarias a la Constitución Federal, las autoridades comunes deberán abstenerse de aplicarlas, sin que esto signifique que tratándose de un precepto de ley, que no está en contradicción manifiesta con texto expreso alguno con la Constitución, y cuya inconstitucionalidad sólo podría sostenerse con razonamientos que no pueden derivarse de una manera clara y precisa de la misma ley, pueda una autoridad común declarar anticonstitucional un precepto de esta naturaleza, no estando facultada para hacer semejante declaración, toda vez que esa facultad sólo la tienen la Suprema Corte y los Jueces de Distrito, en su caso', Quinta Epoca. Cuarta Sala. Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLVI. Página: 2966.--- De la tesis transcrita se advierte que los tribunales comunes si pueden dejar de aplicar leyes que, a su criterio, son anticonstitucionales, por lo cual, la sentencia reclamada es totalmente inconstitucional.--- No es óbice a lo anterior la existencia del siguiente criterio:--- 'LEYES ANTICONSTITUCIONALES, DETERMINACION DE LAS. Si bien el artículo 133 constitucional, dispone que los jueces de cada Estado se arreglarán a la Constitución, a las leyes que emanen de ella y a los tratados, a pesar de las

CORTE DE
LA NACION.
1. DE AGOSTO

disposiciones en contrario, que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados, para determinar si una ley es o no contraria a la Constitución, se requiere que, previamente, haya sido resuelto el caso por los tribunales competentes que no puedan ser otros sino los federales'. Quinta Epoca. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación. Tomo XLVI. Página 947.--- Este criterio es totalmente contradictorio con el indicado en primer término por lo cual desde este momento denuncio la posible contradicción de tesis de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, a fin de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelva cuál es la tesis que debe prevalecer para tal efecto este Tribunal Colegiado deberá abstenerse de conocer de este asunto, hasta en tanto no se resuelva la contradicción de tesis respectiva.--- El segundo criterio es contrario al artículo 103, fracción I y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el numeral indicado en primer término establece que los Tribunales Federales deberán conocer de controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales y, los tribunales de locales conforme al artículo 133,



deberán dejar de aplicar leyes que contravengan la Constitución Federal, no solamente las garantías individuales, pues éste último se refiere a toda la Constitución en su conjunto y no sólo a los derechos públicos subjetivos, toda vez que éstos no son la Constitución, sino parte de ella. El artículo 133 en su segunda parte establece: 'Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes o tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados'.--- Conforme a este artículo supremo es claro que los jueces comunes deben ajustarse a la Constitución y no sólo a las garantías individuales, por lo que no es correcto que por un criterio desafortunado de la Suprema Corte se deja como letra muerta a este precepto constitucional.--- Ahora bien, bajo los siguientes principios, debe concluirse que los Tribunales Locales sí pueden dejar de aplicar leyes que son totalmente inconstitucionales:---

a) Bajo el principio de legalidad, los jueces pueden escoger la ley aplicable, mientras que las autoridades administrativas no. Bajo este principio los jueces pueden escoger a la Constitución.--- b) Todos los jueces pueden desaplicar leyes locales cuando juzguen que

CORTE DE
LA NACION.
A DE ACUERDO

son contrarias a la Ley Suprema.--- c) No existe un sólo órgano que monopolice el sistema de control de constitucionalidad de leyes; no existe implícita ni explícita, la facultad del Poder Judicial de la Federación de monopolizar el control constitucional de las leyes. El artículo 103 constitucional no le dice que tiene la exclusividad de conocer de inconstitucionalidad de leyes, sino lo que en todo caso le corresponde es decir la última palabra. En materia de amparo sólo tiene la última palabra, salvo las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.--- d) Si en el amparo directo se puede plantear la inconstitucionalidad de ley, no existe impedimento para que en una controversia ordinaria se plantee semejante la inconstitucionalidad de leyes, declarando que el acto es inconstitucional por fundarse en una ley inconstitucional y, como tal, dejar de aplicar la ley al caso concreto.--- SEGUNDO.- Las facultades extraordinarias para legislar de que gozó el Presidente de la República para legislar fue en un caso de emergencia, las leyes de emergencia surten efectos hasta en tanto no se extingue el momento por las que se crearon. Ahora bien, si el Congreso de la Unión las ratificó éstas son a todas luces

SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GENERAL



inconstitucionales porque en los artículos 71 y 72 de la Carta Fundamental, no existe la figura de la ratificación de leyes, sino que en todo caso establece plenamente el procedimiento para tal efecto. En las relatadas condiciones los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles son totalmente inconstitucionales. No es óbice a lo anterior el criterio erróneo de que son facultades de cooperación entre poderes, pues la División de Poderes que establece la Constitución está en la misma Constitución y no en criterios secundarios. El artículo 29 y 131 de la misma, claramente precisan que en ningún otro caso se concederán facultades al Presidente de la República para legislar, lo que motiva que no le otorga esas supuestas facultades de cooperación. También este criterio debe (sic) facultades de cooperación debe revocarse para configurar otra jurisprudencia más razonable. Al aplicarse en el juicio estos códigos inconstitucionales, todo el juicio es inconstitucional. La sentencia está basada en leyes inconstitucionales.---
TERCERO.- La Asamblea de Representantes del Distrito Federal a pesar de tener facultades expresas para legislar en materia civil en el artículo 122, Base Primera, fracción V inciso h), de la Constitución Política de los Estados

CORTE DE
LA NACION,
A DE AGUERO

Unidos Mexicanos, todo lo cual la obliga a legislar para emitir el Código Civil y de Procedimientos Civiles, por lo que al aplicarme una legislación expedida por el Presidente de la República en uso de facultades extraordinarias, es claro que se está invadiendo en mi perjuicio la esfera de atribuciones de la legislatura local. Debe aplicarse en mi caso, una ley que expida la legislatura local no la federal, por lo cual, la federación invade la esfera de competencia de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al aplicarme una ley de esa naturaleza, se viola en mi perjuicio el artículo 16 constitucional, por falta de competencia.---

CUARTO.- Los actos de legalidad violan en mi perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, pues claramente se advierte que la sentencia reclamada no está fundada ni motivada, no analiza debidamente mis agravios en apelación, pues en ellos externé claramente cuál era el valor probatorio de los recibos que ofrecí como pruebas en autos, los cuales fueron indebidamente valorados, lo cual no analizó la Sala responsable, sin que entre al fondo del asunto. No funda y motiva porqué a su criterio, si están bien valoradas las pruebas que obran en autos. A pesar que se estableció los mecanismos por los que deben valorarse

**SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARÍA DE**



dichas probanzas éstas no se han valorado, atento al régimen legal vigente, pues como se estableció las remodelaciones a la casa fueron a cambio de rentas, lo que no han entendido los tribunales locales, motivo por el cual debe concederse la protección constitucional.--- Asimismo, las rentas deben aumentarse conforme al índice inflacionario del Banco de México, atento a lo dispuesto por los artículos 17ª, 20, 20 bis, 21 y siguientes del Código Fiscal de la Federación y no como ilegalmente lo establece la parte actora"

CORTE DE
LA NACIÓN.
SALA DE ACUERDOS

CUARTO.- El conocimiento del asunto correspondió al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo Presidente admitió la demanda por auto de quince de abril de mil novecientos noventa y ocho, únicamente en relación con la sentencia reclamada a la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y respecto del Presidente de la República y Asamblea de Representantes del Distrito Federal, a quienes se atribuyó la expedición en uso de facultades extraordinarias de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, así como la omisión de expedir dichos ordenamientos, respectivamente, determinó que no había lugar a tener a tales autoridades como responsables, en términos del artículo 166, fracción IV, de la Ley de Amparo.

QUINTO.- Dicho Tribunal Colegiado dictó resolución el diez de junio de mil novecientos noventa y ocho, en el toca 2946/98, de acuerdo con el punto resolutivo siguiente:

"UNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a JORGE VILLALOBOS TORRES, por derecho propio, contra el acto de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que hizo consistir, en la sentencia definitiva dictada el veinte de febrero de mil novecientos noventa y ocho, en el toca de apelación 7/98".

La anterior resolución se basó en las siguientes consideraciones:

"SEXTO.- Son infundados los conceptos de violación que se expresan.--- Por razón de método se analizarán primeramente el segundo y tercero conceptos de violación, mismos que son infundados y se estudian conjuntamente dada su íntima relacion. En ellos se argumenta que las facultades extraordinarias para legislar de que gozó el Presidente de la República para legislar en un caso de emergencia, surten efectos hasta en tanto no se extinga el momento para las que se crearon; que si bien



**SUPREMA
JUSTICIA DE
LA FEDERACION**



el Congreso de la Unión las ratificó, éstas son a todas luces inconstitucionales porque en los artículos 71 y 72 de la Carta Fundamental, no existe la figura de la ratificación de leyes, sino que en todo caso establece plenamente el procedimiento para tal efecto, por lo que los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles son totalmente inconstitucionales y que la obligada a legislar en materia civil lo es la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.--- Son infundados los anteriores argumentos, porque la expedición de los códigos que menciona el quejoso, no resulta inconstitucional, primeramente, porque no se vulnera el principio de división de poderes, en razón de que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la prohibición contenida en el texto original del artículo 49 constitucional, sobre que se reunieran dos o más poderes en una sola persona o corporación, impedía que uno fuera absorbido orgánicamente por el otro y desapareciera de la estructura del poder, pero no que el Congreso de la Unión transfiriera al Ejecutivo Federal ciertas facultades legislativas como un acto de colaboración entre dos poderes dirigido a salvaguardar la marcha normal de la vida en sociedad, y fue hasta el año de mil novecientos



treinta y ocho en que se adicionó un párrafo final a dicho precepto, cuando se tornó ilegítima esta práctica, porque el Constituyente dispuso que no podrían delegarse en el Ejecutivo Federal facultades para legislar en casos distintos del de suspensión de garantías individuales, al cual se agregó en el año de mil novecientos cincuenta y uno el relativo al artículo 133 de la Carta Magna. Por ende, la constitucionalidad de la expedición de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, no debe examinarse a la luz del texto actual del artículo 49 constitucional, sino del texto original vigente en el año de mil novecientos veintiocho, el cual sólo prohibía la fusión orgánica de dos o más poderes en una sola persona, pero no la transferencia de ciertas facultades de tipo legislativo en determinada materia o ramo, tales como las que se concedieron al Presidente de la República a través de los decretos de delegación respectivos. Es aplicable al caso la jurisprudencia número 89, visible en las páginas 101 y 102, del Tomo I, Materia Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro dice: 'CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GENERAL



FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL. EXPEDICION POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EJERCICIO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS ES CONSTITUCIONAL'.---

El primer concepto de violación es infundado. En efecto, se aduce esencialmente que la responsable al expresar que el análisis de la inconstitucionalidad del Código Civil y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, corresponde a las autoridades federales, no externó argumento lógico-jurídico y mucho menos el fundamento que establezca ese criterio. Asimismo, expresa que las autoridades locales tienen facultades para dejar de aplicar leyes que a su parecer sean inconstitucionales y cita dos criterios para robustecer su afirmación. Es infundada la anterior manifestación, porque la responsable sí externó argumentos lógicos jurídicos para arribar a la determinación de que el análisis de la constitucionalidad de leyes corresponde a la autoridad federal, como lo es la falta de competencia para hacerlo; y si bien no se apoyó en fundamento legal alguno, debe estimarse que su consideración de incompetencia, está basado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución



CORTE DE
LA NACION.
15 DE AGOSTO DE 1998

Federal, que determinan que los órganos jurisdiccionales de amparo son los únicos competentes para determinar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes. Es aplicable al caso, la tesis visible a fojas 318, del Tomo IV, julio-diciembre de 1989, Segunda Parte-1, Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "LEYES. CONSTITUCIONALIDAD DE LAS. LOS TRIBUNALES LOCALES NO ESTÁN FACULTADOS PARA RESOLVER". Respecto de que las autoridades locales tienen facultades para dejar de aplicar leyes que a su criterio son inconstitucionales, tal afirmación resulta inatendible dada la consideración que ya se hizo al estudiar los motivos de inconformidad segundo y tercero en el párrafo que antecede, al establecerse que los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no son inconstitucionales por haber sido promulgados por el Presidente de la República en uso de facultades extraordinarias; por tanto, las tesis que invoca no resultan aplicables al caso.--- El cuarto motivo de inconformidad es infundado, habida cuenta que se aduce que no se analizan debidamente los agravios en los que se externó cuál era el valor probatorio de los recibos ofrecidos como pruebas en autos y





CORTE DE
LA NACION.
DE ABOGADOS

que no funda ni motiva por qué a su criterio, si están bien valoradas las pruebas que obran en autos la sentencia reclamada (sic). En efecto, contrariamente a lo afirmado por el quejoso, la Sala responsable sí analizó el agravio referente a los recibos ofrecidos en autos, pues al efecto argumentó que la condena estuvo correcta, porque no se demostró haber efectuado el pago mediante la exhibición de los recibos de renta correspondientes, en términos del artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ya que las documentales ofrecidas como pruebas no se refieren al pago reclamado; máxime, expuso la ad quem, que al desahogarse la confesional a cargo del demandado reconoció adeudar las rentas reclamadas; así, contra lo alegado por el quejoso, debe afirmarse que la responsable sí externó consideración sobre que las pruebas documentales no destruían la apreciación de que no se habían efectuado los pagos de rentas, sin importar la naturaleza de los mismos; por lo que también, la sentencia reclamada, sí se ocupó de analizar debidamente los agravios en los que se externó cuál era el valor probatorio de los recibos ofrecidos como pruebas en autos; por lo que la sentencia reclamada se encuentra debidamente

fundada y motivada, no obstante que no se hayan invocado preceptos para apoyarla, dado que sí se expresaron las consideraciones jurídicas, suficientes para sustentar la forma en que se resolvió la misma, razón por la cual la autoridad responsable no violó garantías individuales al resolver con acierto la cuestión jurídica planteada.-- En las relatadas condiciones al resultar los conceptos de violación vertidos por el quejoso infundados, y al no existir deficiencia de la queja que suplir en los términos previstos en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada."



SEXTO.- Inconforme con la sentencia transcrita el quejoso hizo valer recurso de revisión, el cual fue admitido a trámite por acuerdo del Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de siete de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

El Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción formuló pedimento número V-160/98 en el sentido de negar el amparo y protección solicitados e imponer multa al quejoso.



SEPTIMO.- Por acuerdo de cinco de octubre de mil novecientos noventa y ocho el asunto fue turnado al señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano para su estudio y formulación del proyecto de resolución correspondiente.

OCTAVO.- Por escrito de seis de mayo de mil novecientos noventa y nueve, el quejoso solicitó se declarara sin materia el presente recurso, en virtud de que ya había entregado el inmueble materia del arrendamiento. A dicho ocurso recayó acuerdo del Presidente de este alto Tribunal, donde se proveyó que las diversas manifestaciones que contiene, se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno.



CONSIDERANDO:

PRIMERO.- El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo directo en revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción II, de la Ley de Amparo y 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se interpone en contra de una sentencia dictada en un juicio de amparo directo, pronunciada por un Tribunal Colegiado de Circuito, en el que se impugnó la expedición de los códigos Civil y de Procedimientos Civiles

para el Distrito Federal, y subsiste en el recurso el problema de inconstitucionalidad planteado.

SEGUNDO.- Los agravios expresados son del tenor siguiente:

"PRIMERO: La sentencia recurrida contraviene totalmente lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, en atención a que en su considerando sexto, el Tribunal Colegiado, establece que analiza conjuntamente el segundo y tercer conceptos de violación por tener íntima relación, sin embargo, de una simple lectura a dichos conceptos de violación, en el segundo se trataron cuestiones sobre las facultades extraordinarias para legislar otorgadas al Presidente de la República y por lo que respecta al tercer concepto de violación se plantearon la invasión de esferas del Ejecutivo Federal a la Asamblea de Representantes del Distrito, de lo cual se advierte que es una sentencia incongruente, porque ambos temas no tienen relación alguna entre ambos, lo cual motiva que se revoque la sentencia y se vuelva a dictar otra en la que se analicen en forma separada ambas figuras jurídicas.--- SEGUNDO.- La sentencia recurrida contraviene lo dispuesto por el artículo 77 de la

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPREM.
JUSTICIA
SECRETARIA



Ley de Amparo, toda vez que ilegalmente establece en su sexto considerando que analiza en forma conjunta el segundo y tercer conceptos de violación por tener estrecha relación lo cual además de ser falso es ilegal. Sin embargo, de una simple lectura el considerando sexto de la referida sentencia ~~se~~ advierte que no expresa razonamiento jurídico alguno con relación al concepto de violación en el que se planteó la invasión de esferas de la federación a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la cual, como en la demanda se dijo es la competente para expedir leyes en materia civil relacionadas con el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 122, Base Primera, fracción V, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Ejecutivo Federal, al haber expedido ~~las~~ leyes referidas ha vulnerado la esfera de competencia de la autoridad local. No es óbice a lo anterior el hecho de que dichas leyes hayan sido expedidas con anterioridad a la vigencia de las reformas constitucionales que le dieron vigencia a la competencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para Legislar en lo relativo al Distrito Federal en materia civil y penal, entre otras, sino que toda ley secundaria debe ser actualizada conforme a



4 CORTE DE
DE LA NACION
SERIAL DE ACUERDOS

la Constitución Federal, según se planteó por este Alto Tribunal al debatir sobre la inconstitucionalidad de las leyes que establecen más de treinta y seis horas de arresto como medida de apremio, pues en ese entonces eran leyes que entraron en vigencia antes de la reforma al artículo 21 de la Carta Fundamental y aun así se declararon inconstitucionales, lo cual motiva que en el presente caso también deben actualizarse por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en atención a que en el Decreto de reformas al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se estableció en sus artículos transitorios que dichas leyes tendrían vigencia hasta en tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expida las nuevas leyes civiles o penales que regirán en el Distrito Federal, es evidente que el órgano reformador de la Constitución Federal ordenó al legislador local la inmediata expedición de leyes sobre su competencia.--- TERCERO.- La sentencia recurrida establece que los jueces locales no tienen facultades para dejar de aplicar leyes que a su criterio resulten inconstitucionales. Dicho Tribunal Colegiado con un criterio cerrado, además indica que conforme al artículo 103, fracción I, de la



SUPREMA
JUSTICIA D
SECRETARIA DE



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Judicial de la Federación es el único competente para conocer sobre la constitucionalidad de leyes. Lo anterior además de absurdo resulta un criterio cerrado, al estilo antiguo, del más atrasado conocimiento jurídico, por lo siguiente: El artículo 103, fracción I, aludido, no indica que el Poder Judicial de la Federación tenga facultades 'exclusivas o reservadas' para conocer de inconstitucionalidad de leyes.--- El artículo 133 de la Carta Fundamental, otorga facultades de control constitucional difuso a los órganos jurisdiccionales locales.--- No existe un órgano que monopolice el sistema de control constitucional de leyes.--- No existe implícita o explícitamente dicha facultad al Poder Judicial de la Federación. En todo caso sus facultades son decir la última palabra.--- Por lo anterior, debe considerarse que el criterio esgrimido por el Tribunal Colegiado de Circuito, no es acertado sobre el control difuso de control constitucional (sic)".



CORTE DE
E LA NACION.
TRIBUNAL DE ACUERDOS.

TERCERO.- Previamente en cuanto a la petición del recurrente en el sentido de declarar sin materia el presente recurso, debe decirse que tal petición es improcedente, pues si lo pretendido por el inconforme es provocar los efectos

conclusivos propios de un desistimiento, en el caso no se reúnen los requisitos necesarios para ello, precisamente porque el escrito relativo no está ratificado por su autor, lo que obliga a denegar la solicitud planteada.

CUARTO.- Los agravios expresados son:

a) Que el tribunal colegiado indebidamente analiza conjuntamente el segundo y tercer conceptos de violación, sosteniendo su íntima vinculación, sin embargo, en el segundo se tratan cuestiones sobre las facultades extraordinarias para legislar otorgadas al Presidente de la República y en el tercero se plantea la invasión de esferas del Ejecutivo Federal respecto de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, es decir, que ambos temas no tienen ninguna relación.

b) Que en la sentencia recurrida no se expresa razonamiento jurídico alguno en relación con el concepto de violación en que se planteó la cuestión de invasión de esferas, pues la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es la autoridad competente para expedir leyes en materia civil relacionadas con el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 122, base primera, fracción V, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual el Ejecutivo Federal ha vulnerado la competencia de la autoridad local al expedir dichas leyes.



c) Que la cuestión de invasión de esferas se actualiza, no obstante que las leyes expedidas por el Ejecutivo Federal se hayan emitido con anterioridad a la vigencia de las reformas constitucionales que dieron competencia a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en materia civil y penal en lo relativo al Distrito Federal, toda vez que la ley secundaria debe ser actualizada de acuerdo con la Constitución Federal, según se planteó por la Suprema Corte de Justicia al debatir la inconstitucionalidad de las leyes que establecen más de treinta y seis horas de arresto como medida de apremio, pues estos ordenamientos entraron en vigor antes de la reforma al artículo 21 constitucional y aún así se declararon inconstitucionales, lo que motiva que en el presente caso las citadas leyes civiles deben actualizarse en términos del artículo 122, base primera, fracción V, inciso h), constitucional, en atención a que en el decreto de reformas correspondiente no se establece en los artículos transitorios que las leyes expedidas por el Ejecutivo Federal tendrán vigencia hasta en tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expida los nuevos códigos civiles o penales que regirán en esta entidad federativa, es decir, el órgano reformador de la Constitución ordenó al legislador local la inmediata expedición de leyes de su competencia.

d) Que el artículo 103, fracción I, constitucional, no indica que el Poder Judicial de la Federación tiene facultades exclusivas o reservadas para conocer de la

inconstitucionalidad de leyes; en tanto que el artículo 133 constitucional otorga facultades de control difuso a los órganos jurisdiccionales locales; de modo que no existe un órgano que monopolice el sistema de control constitucional de leyes ni esa facultad es otorgada explícita o implícitamente al mencionado poder, el que en todo caso tiene la facultad de decir la última palabra.

En relación con el agravio sintetizado en el inciso a), debe decirse que, contra lo argumentado por el recurrente, la impugnación de inconstitucionalidad planteada respecto de los códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se apoyó en dos cuestionamientos estrechamente vinculados, como son el relativo al otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente de la República para emitir esos ordenamientos y que, en términos del artículo 122, base primera, fracción V, inciso h), constitucional, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es la autoridad competente para expedir dichas codificaciones, lo cual no ha ocurrido hasta la actualidad, existiendo invasión de esferas a su ámbito de competencia por el Ejecutivo Federal, al aplicarse en el juicio de origen los códigos emitidos por éste; es decir, por la forma en que fue planteada la cuestión de inconstitucionalidad, no puede desvincularse el estudio de ambos cuestionamientos, pues lo relativo al otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir los códigos Civil y de Procedimientos Civiles, para el Distrito Federal, guarda íntima relación con la impugnación

SUPREMA Q
JUSTICIA DE
SECRETARIA GENERAL



por invasión de esferas, la cual deriva de que ante la omisión del legislador local de emitir los ordenamientos respectivos, el Ejecutivo Federal menoscaba la soberanía de la legislatura local por la aplicación de las leyes expedidas por aquél.

En este sentido, debe decirse que según se aprecia de la demanda de garantías, el quejoso hizo consistir el segundo concepto de violación en lo siguiente:

"Las facultades extraordinarias para legislar de que gozó el Presidente de la República para legislar fue en un caso de emergencia, las leyes de emergencia surten efectos hasta en tanto no se extingue el momento por las que se crearon. Ahora bien, si el Congreso de la Unión las ratificó éstas son a todas luces inconstitucionales porque en los artículos 71 y 72 de la Carta Fundamental, no existe la figura de la ratificación de leyes, sino que en todo caso establece plenamente el procedimiento para tal efecto. En las relatadas condiciones los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles son totalmente inconstitucionales. No es óbice a lo anterior el criterio erróneo de que son facultades de cooperación entre poderes, pues la División de Poderes que establece la Constitución está en la misma Constitución y no en criterios secundarios. El artículo 29 y 131



CORTE DE
LA NACION.
LIBRE EXPRÉSION

de la misma, claramente precisan que en ningún otro caso se concederán facultades al Presidente de la República para legislar, lo que motiva que no le otorga esas supuestas facultades de cooperación..."

A su vez, el tercer concepto de violación se hizo descansar en lo siguiente:

"La Asamblea de Representantes del Distrito Federal a pesar de tener facultades expresas para legislar en materia civil en el artículo 122, Base Primera, fracción V inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo lo cual la obliga a legislar para emitir el Código Civil y de Procedimientos Civiles, por lo que al aplicarme una legislación expedida por el Presidente de la República en uso de facultades extraordinarias, es claro que se está invadiendo en mi perjuicio la esfera de atribuciones de la legislatura local. Debe aplicarse en mi caso, una ley que expida la legislatura local no la federal, por lo cual, la federación invade la esfera de competencia de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al aplicarme una ley de esa naturaleza, se viola en mi perjuicio el artículo 16 constitucional, por falta de competencia".



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GENERAL



Por lo tanto, es inconcuso que el análisis del concepto de violación concerniente a la impugnación de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República para legislar en materia civil en lo relativo al Distrito Federal, se encuentra estrechamente vinculado al examen del diverso concepto de violación que atañe al planteamiento de invasión de esferas, precisamente porque éste se apoyó en que, ante la omisión de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal de expedir los códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el Ejecutivo Federal conculcó la soberanía de dicha legislatura local por la aplicación de los ordenamientos emitidos por aquél.



CORTE DE
LA NACION
DE ACUERDO

Consecuentemente, el tribunal colegiado no incurrió en violación alguna al estudiar conjuntamente ambos conceptos de violación, según lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, acorde con el cual los tribunales colegiados podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda; tal precepto dispone:

“Artículo 79. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los jueces de Distrito, deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se

estimen violados, y podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda”.

Ahora bien, en relación con la impugnación de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República para expedir los códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debe decirse que dicho argumento es infundado, pues esta Suprema Corte de Justicia ha establecido que la prohibición contenida en el texto original del artículo 49 constitucional, sobre que se reunieran dos o más poderes en una sola persona o corporación, impedía que uno fuera absorbido orgánicamente por el otro y desapareciera de la estructura de poder, pero no que el Congreso de la Unión transfiriera al Ejecutivo Federal ciertas facultades legislativas como un acto de colaboración entre dos poderes dirigido a salvaguardar la marcha normal de la vida en sociedad, y hasta el año de mil novecientos treinta y ocho en que se adicionó un párrafo final a dicho precepto, fue cuando se tornó ilegítima esa práctica, en razón de que el constituyente dispuso que no podrían delegarse en el Ejecutivo Federal facultades para legislar en casos distintos al de suspensión de garantías, agregándose en el año de mil novecientos cincuenta y uno el diverso supuesto establecido en el artículo 131 constitucional; de



modo que la constitucionalidad de la expedición de los referidos códigos no debe examinarse a la luz del texto actual del artículo 49 de la Constitución, sino del texto vigente en mil novecientos veintiocho, el cual sólo prohibía la fusión orgánica de dos o más poderes en una sola persona, pero no la transferencia de ciertas facultades de tipo legislativo en determinada materia o ramo, como las que se concedieron al Presidente de la República a través de los decretos de delegación respectivos, de acuerdo en la jurisprudencia sustentada por este Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia, identificada con el número 89, publicada en la página ciento uno, Tomo I, Parte SCJN, Octava Época, del Apéndice de 1995, que dice:

LA CORTE DE
DE LA NACION
GENERAL DE ACUERDOS

**"CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA
REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL. SU
EXPEDICION POR EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA EN EJERCICIO DE FACULTADES
EXTRAORDINARIAS ES CONSTITUCIONAL.- La
expedición por el Presidente de la República,
en uso de facultades extraordinarias otorgadas
por el Congreso de la Unión, del Código Civil
para el Distrito Federal en Materia Común y
para toda la República en Materia Federal, no
vulnera el principio de división de poderes,
pues según ha interpretado esta Suprema
Corte, la prohibición contenida en el texto**

original del artículo 49 entonces vigente, de que se reunieran dos o más poderes en una sola persona o corporación, impedía que uno fuera absorbido orgánicamente por el otro y desapareciera de la estructura del poder, pero no que el Congreso de la Unión transfiriera al Ejecutivo Federal ciertas facultades legislativas como un acto de colaboración entre dos poderes dirigido a salvaguardar la marcha normal y regular de la vida en sociedad; fue hasta el año de mil novecientos treinta y ocho en que se adicionó un párrafo final a dicho precepto, cuando se tornó ilegítima esta práctica inveterada surgida en el siglo pasado, porque el Constituyente dispuso que no podrían delegarse en el Ejecutivo Federal facultades para legislar en casos distintos del de suspensión de garantías individuales, al cual se agregó en el año de mil novecientos cincuenta y uno el relativo al artículo 131 de la misma Ley Suprema”.



También resultan aplicables las tesis del Pleno, la primera, y de la Segunda Sala, las restantes, que éste órgano comparte, publicadas, en su orden, en la página 18, volumen 86, Primera Parte; página 3741, Tomo XLIV; página 743, Tomo XLVI; y página 5139, Tomo XLVII; del Semanario Judicial de la Federación, de los rubros y textos siguientes:



**"CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS
PENALES, PUBLICADO EL 30 DE AGOSTO DE
1934, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA EN USO DE FACULTADES
EXTRAORDINARIAS. CONSTITUCIONALIDAD.**

En el caso de la expedición del Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de agosto de 1934 por el C. Presidente de la República en uso de facultades extraordinarias, no se contravienen los artículos 14, 16 y 49 de la Constitución Federal porque el Congreso de la Unión haya concedido al Ejecutivo facultades para legislar, pues con tal delegación no se reunieron en una sola persona o corporación dos o más poderes, ni se depositó el Legislativo en un solo individuo, sino que se originó una situación en que el Ejecutivo gozó de facultades legislativas por delegación del Congreso de la Unión, más no que este poder desapareciera y todas sus atribuciones pasaran al Ejecutivo, caso prohibido por el artículo 49 de la Constitución Federal. Si no se vulnera este precepto, porque no es admisible el argumento de que se reunieron en una persona dos o más poderes, tampoco se vulneran los artículos 14 y 16 por las mismas



CORTE DE
LA NACION.
DE ACUERDO.

razones. En relación con el precepto constitucional primeramente citado, esta Suprema Corte de Justicia había interpretado tal estatuto constitucional en el sentido de que la delegación de facultades por el Congreso de la Unión al Ejecutivo Federal, no era violatoria de garantías individuales, habiéndose integrado las tesis jurisprudenciales números 477 y 478 de la Compilación de Jurisprudencia 1917 a 1954 interpretando estas tesis se concluye que lo prohibido por la Constitución Federal es la reunión de dos o más poderes en uno solo, que supone su fusión en uno de ellos, lo cual no puede entenderse sin la destrucción del otro, y en el presente caso el Poder Legislativo siguió poseyendo las facultades propias de su función y sólo autorizó al Poder Ejecutivo para que expidiera determinadas leyes entre las que se encontraba el Código reclamado. La transmisión de la función legislativa fue parcial y no total. Esta última es la que se encuentra prohibida por el artículo 49 de la Constitución Federal."

"FACULTADES EXTRAORDINARIAS.- Las facultades extraordinarias concedidas por el Poder Legislativo, al Ejecutivo de la Unión, no



implican que se reúnan o concentren dos poderes, de los que se reside la soberanía nacional, en una sola persona, si estas facultades se transmitieron limitadamente y sin que el Poder Legislativo abdicara de su soberanía por lo que debe entenderse que tal delegación de facultades es una cooperación o auxilio de un Poder para otro, lo cual no vulnera ni rompe la prohibición constitucional, de reunir dos o más Poderes en una misma persona".



CORTE DE
LA NACION.
SAL. DE AGUAYO

"FACULTADES EXTRAORDINARIAS, CONSTITUCIONALIDAD DE LAS.- Si bien es cierto que la facultad de expedir leyes, corresponde al Poder Legislativo, también lo es que, cuando por circunstancias graves o especiales, no hace uso de esa facultad o de otros que le confiere la Constitución, puede concedérselas al Ejecutivo, para la marcha regular o bien funcionamiento de la administración pública, sin que se repunte de anticonstitucional el uso de dichas facultades por parte de aquél; porque ello no significa ni la reunión de dos Poderes en un solo, pues no pasan al último todas las atribuciones correspondientes al primero, ni tampoco la delegación del Poder Legislativo en el

Ejecutivo, sino más bien, debe negarse el amparo que se pida contra las facultades delegadas al Presidente, para la expedición de leyes”.

“FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL EJECUTIVO.- La delegación de facultades de un poder a otro, o sea del Legislativo al Ejecutivo, no es anticonstitucional, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, porque no significa mas que una cooperación del Poder Ejecutivo al Legislativo, máxime si esa facultad se da durante el período de sesiones ordinarias de la Cámara de diputados y, por lo tanto, no significa que se haga abandono total de las funciones legislativas, en otro poder”.



SUPREMA
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA

En otro orden de ideas, en relación con el agravio resumido en el inciso b), debe decirse que resulta fundado pero inoperante, ya que aun cuando efectivamente el tribunal colegiado omitió pronunciarse expresamente respecto del segundo concepto de violación expuesto en la demanda de amparo, relativo al planteamiento de invasión de esferas competenciales, lo que obliga a su examen en la revisión, en términos del artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo; sin embargo, ello no conduce la revocación de la sentencia recurrida y el otorgamiento del amparo solicitado, puesto que, en primer término, debe insistirse en que la expedición



de los códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no es inconstitucional por el hecho de haberse otorgado facultades extraordinarias al Presidente de la República; por consecuencia, como el planteamiento de invasión de esferas se apoya en el argumento de que en el juicio de origen se aplicaron esos ordenamientos ante la omisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de legislar en esa materia, en términos del artículo 122, base primera, fracción V, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente que, en esas condiciones, la invasión de esferas competenciales se constriñe a la impugnación de la falta de emisión por el citado órgano legislativo local de los códigos correspondientes.

CORTE DE
JURISPRUDENCIA
FEDERAL

Delimitada así la cuestión de invasión de esferas, como aplicación de los códigos Civil y de Procedimientos Civiles para Distrito Federal expedidos por el Presidente de la República, ante la omisión de legislar atribuida al referido órgano legislativo local, debe considerarse la inoperancia del agravio a estudio, teniendo presente que los artículos 107, fracción II, constitucional, y 76 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente:

“Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: ... II. La sentencia será siempre tal,

que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare..."

"Artículo 76. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare".



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARÍA GENERAL

Por consiguiente, cuando en la demanda de amparo directo o en los agravios expresados en la revisión interpuesta en dicho juicio constitucional, se impugna la omisión de una legislatura, ya sea local o federal, de expedir determinada codificación u ordenamiento, la imposibilidad jurídica de analizar tales cuestionamientos deriva de que conforme al principio de relatividad que rige en el juicio de amparo, establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional, y 76 de la Ley de Amparo, la sentencia que en éste se dicte será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja,



sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare, lo que impide que una hipotética concesión de la protección federal reporte algún beneficio al quejoso, dado que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, esto es, a legislar, porque esto sería tanto como pretender dar efectos generales a la ejecutoria, ya que la reparación constitucional implicaría la creación de una ley que por definición constituye una regla de carácter general, abstracta e impersonal, la que vincularía no sólo al recurrente y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada, apartándose del enunciado principio. Es aplicable al caso por analogía, la tesis sustentada por este Tribunal en Pleno, identificada con el número P. CLXVIII/97 publicada en la página ciento ochenta, Tomo VI, diciembre de 1997, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor:

"LEYES DE AMPARO CONTRA. ES IMPROCEDENTE AQUEL EN QUE SE IMPUGNA LA OMISION DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE EXPEDIR UNA LEY O DE ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO LEGAL A UNA REFORMA CONSTITUCIONAL.- Respecto de la omisión del legislador ordinario de dar cumplimiento al mandato constitucional de expedir determinada ley o de reformar la existente en armonía con las disposiciones fundamentales, es

improcedente el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la citada legislación ordinaria, en virtud de que, según el principio de relatividad que rige en el juicio de amparo, la sentencia que en éste se dicte será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare, lo que impide que una hipotética concesión de la protección federal reporte algún beneficio al quejoso, dado que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, es decir, a legislar, pues esto sería tanto como pretender dar efectos generales a la ejecutoria, ya que la reparación constitucional implicaría la creación de una ley que es una regla de carácter general, abstracta y permanente, la que vincularía no sólo al peticionario de garantías y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada, lo que es inconcuso



SUPREMA
JUSTICIA
SECRETARÍA



resultaría apartado del principio de relatividad enunciado".

La aplicación analógica de la tesis transcrita, se justifica atendiendo el texto del artículo 166, fracción IV, de la Ley de amparo, que dispone:

"Artículo 166. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán: ...IV. La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, constitutivo del acto o de los actos reclamados; y si se reclamaren violaciones a las leyes del procedimiento, se precisará cuál es la parte de éste en la que se cometió la violación y el motivo por el cual se dejó sin defensa al agraviado.--- Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la ley, el tratado o el reglamento aplicado, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, el tratado o el reglamento, y la calificación de éste por el tribunal de amparo se hará en la parte considerativa de la sentencia".



CORTE DE
DE LA NACION.
JEFES DE AUSENTO

De donde se sigue que acorde al precepto en consulta, si bien en el amparo directo puede alegarse la inconstitucionalidad de algún precepto en los conceptos de violación; sin embargo, si respecto del precepto reclamado se actualiza alguna de las hipótesis que, si se tratare de un juicio de amparo indirecto, determinaría la improcedencia del juicio en su contra y el sobreseimiento respectivo, tratándose de un juicio de amparo directo, al no señalarse como acto reclamado tal norma general, el pronunciamiento del órgano que conozca del amparo debe hacerse únicamente en la parte considerativa de la sentencia, declarando la inoperancia de los conceptos de violación respectivos, pues ante la imposibilidad de examinar el precepto impugnado, resultarían ineficaces para conceder el amparo. Y por aplicación de idéntico principio, deben declararse inoperantes los agravios expresados en el amparo directo en revisión, cuando respecto del precepto impugnado en los conceptos de violación, se actualizare una causa de improcedencia si se tratare de un juicio de amparo indirecto.

Ahora bien el análisis desde una perspectiva distinta del planteamiento de invasión de esferas, permite estimar que el concepto de violación relativo es también infundado, tomando en cuenta que si bien el artículo 122, Base Primera, fracción V, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a legislar en las materias civil y penal del



ámbito local, ya que dicho precepto textualmente dispone lo siguiente:

"ARTICULO 122.- Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo." --
'...La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones:-- '... C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:-- 'BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea Legislativa...' -- '...V.- La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:--
'...h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro público de la propiedad y de comercio...".

ORTE DE
LA NACION.
DE ACUERDO.

No obstante, debe tenerse presente que, de acuerdo con el decreto de veinte de octubre de mil novecientos noventa y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mes, por el que se reformaron los

artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 105, 107, 122, así como la denominación del título quinto, adición de una fracción IX al artículo 76 y un primer párrafo al 119 y se derogó la fracción XVII al artículo 89 de la Constitución Federal; la referida facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de legislar en las materias civil y penal para esta entidad federativa, se otorgó en términos del artículo décimo primero transitorio del mencionado decreto, en la forma que sigue:

“DECIMO PRIMERO.- El Congreso de la Unión conservará la facultad de legislar, en el ámbito local, en las materias de orden común, civil y penal para el Distrito Federal, en tanto se expidan los ordenamientos de carácter federal correspondientes, a cuya entrada en vigor, corresponderá a la Asamblea de Representantes legislar sobre el particular, en los términos del presente Decreto”.



Acordé con lo dispuesto en el artículo décimo primero transitorio del decreto de veinte de octubre de mil novecientos noventa y tres, publicado el día veinticinco siguiente en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reformó el artículo 122 constitucional, entre otros preceptos de la Constitución, en un principio la facultad otorgada a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal de expedir los ordenamientos correspondientes a las materias civil y



penal del ámbito local, se sujetó inicialmente a la condición de que el Congreso de la Unión expidiera los códigos de carácter federal en dichas materias y hasta la entrada en vigor de éstos, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal podría legislar al respecto.

Posteriormente, por decreto de reformas a la Constitución publicado en el Diario Oficial de la Federación, de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, se fijó término para la entrada en vigor de la facultad concedida a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para expedir los citados códigos, según artículo décimo primero que establece:



CORTE DE
LA NACION.
DEL DE ACUERDOS.

"DECIMO PRIMERO.- La norma que establece la facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en materias civil y penal para el Distrito Federal entrará en vigor el 1º de enero de 1999".

En consecuencia, si la facultad otorgada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para expedir los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal entró en vigor hasta el primero de enero de mil novecientos noventa y nueve, la expedición de dichos códigos por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias, con anterioridad a esa fecha, no invade la esfera de competencia

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en dichas materias.

En lo que se refiere al agravio reseñado en el inciso c), debe desestimarse porque los cuestionamientos que en él se contienen no fueron expuestos ante el tribunal colegiado, pues ante éste no se expresó la aseveración que ahora se vierte acerca de que la ley secundaria debe ser actualizada conforme a la Constitución Federal, como supuestamente se planteó por la Suprema Corte de Justicia al resolver la inconstitucionalidad de las leyes que establecen más de treinta y seis horas de arresto como medida de apremio, siendo así, si lo anterior no fue planteado en los conceptos de violación, no puede formar parte de la litis en la revisión.

PREMA
JUSTICIA DI
SECRETARIA

Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia número 31, publicada en la página veinte, del Tomo VI, del Apéndice en consulta, del tenor siguiente:

"AGRAVIOS EN LA REVISION INATENDIBLES.-

No pueden tenerse como agravios en la revisión, las violaciones que no fueron invocadas en la demanda de amparo, dando lugar con ello a que no se oiga a las autoridades responsables".



Por otra parte, el agravio identificado con el inciso d), es infundado, porque contrariamente a lo argumentado por el recurrente, esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido que el control de constitucionalidad de leyes se ejerce en nuestro sistema jurídico exclusivamente por los tribunales de la federación.

En efecto, este Supremo Tribunal al establecer la interpretación y los alcances del numeral 133 de la Constitución Federal, en lo que respecta al denominado "control difuso", se ha pronunciado en el sentido de que sólo el Poder Judicial Federal, puede calificar la constitucionalidad de las leyes a través del juicio de amparo.

COPIA DE
LA NACION
DEL DE ACUERDO

El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala textualmente:

"Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados".

En términos generales este numeral establece expresamente la supremacía constitucional y un orden jerárquico de los ordenamientos legales en nuestro sistema legal. Además, en su parte final consigna la obligación para los jueces de los Estados, de respetar la Constitución Federal, leyes federales y tratados, con preferencia a las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones y leyes locales.

No pocas discusiones doctrinales y judiciales ha suscitado la disposición de que se viene hablando en derredor de dos cuestiones básicas; una, el conflicto de leyes en el espacio, por cuanto a la validez del derecho federal y del derecho local cuando rigen de manera diversa una misma materia, y otra, el ejercicio del llamado control difuso de la Constitución por parte de las autoridades fuera del procedimiento constitucional previsto por los artículos 103 y 107 constitucionales.

En la especie, se controvierte el segundo aspecto, específicamente en cuanto a la posibilidad de que, con fundamento en el artículo que nos ocupa, los jueces del orden común puedan calificar las leyes o actos de autoridad bajo la consideración de que resultan violatorias de la Constitución.



Así, concretamente por lo que se refiere al problema planteado en el caso a estudio, resulta inadmisibile sostener, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución General de la República, los jueces del orden común pueden abstenerse de aplicar leyes locales, con base en el argumento de que éstas son violatorias de la Ley Suprema.

Si bien es cierto que, en principio, la redacción del artículo 133 constitucional sugiere la posibilidad de que los jueces del orden común, pueden juzgar la constitucionalidad no sólo de sus actos sino además la de los ajenos, especialmente las leyes y Constituciones de los Estados en cuya jurisdicción ejerzan, y que en dicho sentido llegó a pronunciarse inicialmente esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, dicha postura ha sido superada por este Alto Tribunal en el sentido opuesto teniendo en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios que informan nuestra Constitución.

En cuanto al criterio actual esta Suprema de Justicia ha resuelto numerosos precedentes en los que ha sostenido, que sólo al Poder Judicial de la Federación compete establecer la inconstitucionalidad de las leyes y actos de autoridad; sirven de apoyo a este criterio, las tesis sustentadas, respectivamente, por la anterior integración de la Primera y Tercera Sala, las dos últimas, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas

setecientos setenta y cinco, Tomo LXXXIX, Quinta Epoca; 37, volumen CXXXV, Cuarta Parte, Sexta Epoca; y 17, volumen 42, Cuarta Parte, Séptima Epoca; del Semanario Judicial de la Federación; cuyos rubro y texto son los siguientes:

"INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES.-

Esta Suprema Corte tiene facultad de resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley o de un acto de autoridad, siempre que exista petición o instancia de parte, que siga el procedimiento establecido por la ley, o sea, el juicio de amparo y se oiga la defensa de la autoridad responsable, y que, actuando en ese procedimiento y no en otro diverso se pronuncie sentencia que se ocupe tan sólo del caso concreto singular al cual se refiere la queja, limitándose a proteger y amparar al agraviado, pero sin hacer declaración general respecto de la ley o acto que motivare aquélla. Incumbe también a la Suprema Corte de Justicia la defensa de la Constitución en otro caso previsto por el artículo 105 de la propia Carta Magna. Conforme a esa norma, sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación corresponde conocer de las controversias que se susciten. Entre los Poderes de un mismo

SUPREMA C
JUSTICIA DE L
SECRETARIA GENERAL



Estado sobre la constitucionalidad de sus actos. Tal controversia tampoco se abre de oficio; precisa para su planteamiento, la demanda del poder que se sienta ofendido o atacado para que se justifique la intervención de la Suprema Corte de Justicia por medio de un procedimiento que, entre tanto no se lo fije la ley, es el de un juicio ordinario donde se oye a la parte demandada. Por tanto, en este caso, la facultad de conocimiento está subordinada también a la existencia de una instancia de parte interesada, y el fallo debe producirse dentro del procedimiento antes citado y no fuera de él. El artículo 133 de la Constitución es conformativo del régimen federal y evita el predominio de las leyes locales sobre la Constitución, estableciendo con firmeza la supremacía de la misma Carta Fundamental; pero no es fuente de competencia de la cual resulte la facultad de los tribunales federales, y, por tanto, de la Suprema Corte para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley. Obliga a los jueces de los Estados a proceder siempre conforme a la Constitución, obligación que, por lo demás no es tan sólo de estos funcionarios sino de todas las autoridades cuyos actos tienen la presunción de constitucionalidad, que cede únicamente

CORTE DE
NACION.
DE ACUERDO

ante la eficacia decisiva de un fallo judicial federal que lo excluya. Este fallo no puede producirse sino mediante la controversia que prevé el artículo 103 constitucional, esto es, mediante el juicio de amparo, satisfaciéndose las condiciones antes mencionadas. Existe también la fracción XII del artículo 107 Constitucional, que obliga a los alcaides y carceleros a obrar conforme a la Constitución, poniendo en libertad a los reos si no recibieron oportunamente el auto de prisión preventiva; pero este caso se estima como de excepción aún dentro del mismo artículo 107 que establece las bases del juicio constitucional de garantías o de amparo”.



“CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, EXAMEN DE LA, IMPROCEDENTE, POR LA AUTORIDAD JUDICIAL COMUN.- No existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que imponga a la autoridad judicial común, por aplicación literal del artículo 133 constitucional, la obligación de calificar la constitucionalidad de las leyes que norman el contenido de sus resoluciones; si bien es cierto que ocasionalmente ha llegado a sustentarse tal tesis, la mayoría de los precedentes se orientan en el sentido de



considerar que sólo el Poder Judicial de la Federación puede calificar la constitucionalidad de las leyes a través del juicio constitucional de amparo".

"CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, EXAMEN DE LA, IMPROCEDENTE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL COMUN. Conforme a la Constitución Federal, no todo órgano judicial es competente para declarar la inconstitucionalidad de una ley sino solamente el Poder Judicial Federal, a través del juicio de amparo, donde la definición de inconstitucionalidad emitida por la autoridad federal se rodea de una serie de requisitos que tratan de impedir una desorbitada actividad del órgano jurisdiccional en relación con los demás poderes; aún en el caso del artículo 133 constitucional en relación con el 128, que impone a los jueces de los Estados la obligación de preferir a la Ley Suprema cuando la ley de su estado la contraría, el precepto se ha entendido con el sistema según el cual es únicamente el Poder Federal el que puede hacer declaraciones de inconstitucionalidad. Esto es así, porque nuestro Derecho Público admite implícitamente que, conforme al principio de la división de poderes, el órgano

COPIA DE
LA NACIÓN
DE ACUERDO

judicial está impedido de intervenir en la calificación de inconstitucionalidad de los actos de otros poderes, a menos que a ese órgano se le otorgue una competencia expresa para ese efecto, como ocurre en la Constitución Federal cuando dota al Poder Judicial de la Federación de la facultad de examinar la constitucionalidad de los actos de cualquier autoridad”.

Es decir, el criterio de esta Suprema Corte de Justicia, que se reitera en el presente fallo, considera que el artículo 133 Constitucional no es fuente de facultades de control constitucional para los jueces del orden común, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta para ese efecto, que se traduce en un juicio específico cuya procedencia se encuentra sujeta a diversos requisitos con la finalidad de evitar la anarquía en la organización y distribución de competencias de las autoridades estatales.

A mayor abundamiento, debe aclararse en esta línea de interpretación, que si bien desde la Constitución de 1857 se reprodujo en esencia el artículo 126 de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica en el contenido del actual artículo 133 de la Constitución de 1917, sin embargo su aplicación es diversa en ambas latitudes, pues mientras en aquel país esta disposición tiene una vigencia plena en la



medida en que el control constitucional se despliega por la vía de excepción o defensa inicialmente ante cualquier autoridad local y pasa después a la jurisdicción federal a través de recursos procesales, que vinculan dentro de un sólo proceso las dos instancias desarrolladas sucesivamente ante las dos jurisdicciones; en cambio, en nuestro sistema jurídico, como ya se asentó con antelación, el control constitucional se previene en la vía de acción y se encomienda exclusivamente al Poder Judicial de la Federación.

Sobre el particular, son aplicables las jurisprudencias números 73/1999, y 74/1999, aprobadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada celebrada el trece de julio de mil novecientos noventa y nueve, pendientes de publicación, que dicen lo siguiente:

**"CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCION.
ES ATRIBUCION EXCLUSIVA DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACION. La supremacía
constitucional se configura como un principio
consustancial del sistema jurídico-político
mexicano, que descansa en la expresión
primaria de la soberanía en la expedición de la
Constitución, y que por ello coloca a ésta por
encima de todas las leyes y de todas las
autoridades, de ahí que las actuaciones de
éstas deben ajustarse estrictamente a las**

disposiciones de aquélla. En este sentido, más que una facultad, la supremacía constitucional impone a toda autoridad el deber de ajustar a los preceptos fundamentales, los actos desplegados en ejercicio de sus atribuciones. Por tanto, si bien es cierto que los tres Poderes de la Unión deben observar la Ley Suprema, no puede afirmarse que por esta razón, las autoridades puedan, por sí y ante sí, en el ejercicio de funciones materialmente jurisdiccionales, examinar la constitucionalidad de sus propios actos o de los ajenos, toda vez que, al respecto, la propia Constitución consagra, en sus artículos 103 y 107, un medio de defensa ex profeso, por vía de acción, como es el juicio de amparo y lo encomienda, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federación, sentando las bases de su procedencia y tramitación".

SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA DE

"CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.- El texto expreso del artículo 133 de la Constitución Federal previene que 'Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en



contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados'. En dicho sentido literal llegó a pronunciarse la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, la postura sustentada con posterioridad por este Alto Tribunal, de manera predominante, ha sido en otro sentido, tomando en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios que conforma nuestra Constitución. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer uno y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto".



CORTE DE
LA NACION
DE ACUERDO

De acuerdo con las consideraciones que anteceden, al no advertirse, en términos del artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, que haya habido en contra del quejoso y recurrente una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, y obligara a suplir en su favor la queja

deficiente, debe confirmarse la sentencia recurrida y negarse la protección constitucional solicitada.

CUARTO.- Por último, en relación con el pedimento formulado por el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, donde solicita se imponga multa al recurrente, debe decirse que es improcedente.

Efectivamente, el único caso en que debe imponerse multa al inconforme en la revisión, es el que se refiere al desechamiento del recurso, por insubsistencia del problema de inconstitucionalidad planteado, pero no el relativo a cuando el recurso es procedente y, consecuentemente, se emprende el examen de los agravios expresados en relación con esa cuestión, independientemente de la calificación que se les otorgue en la parte considerativa de la sentencia. La hipótesis señalada en primer término se apoya en el texto del artículo 90, último párrafo, de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente:

"Siempre que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o, en sus respectivos casos, el Pleno, o la Sala correspondiente, desechen el recurso de revisión interpuesto contra sentencias pronunciadas por Tribunales Colegiados de Circuito, por no contener dichas sentencias decisión sobre la constitucionalidad de una ley o no establecer la interpretación



directa de un precepto de la Constitución Federal, impondrán, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, al recurrente o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario".

Por consiguiente, debe desestimarse el pedimento del Ministerio Público en este aspecto.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:



A CORTE DE
DE LA J. N.
GENERAL DE

PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jorge Villalobos Torres, por su propio derecho, contra el acto que atribuyó a la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la sentencia de veinte de febrero de mil novecientos noventa y ocho, dictada en el toca de apelación 7/98.

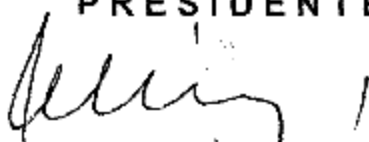
NOTIFIQUESE; y con testimonio de la presente resolución vuelvan los autos al lugar de origen y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano

Azuela Güitrón, Juventino Castro y Castro, Juan Díaz Romero, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza y Presidente Genaro David Góngora Pimentel. Ausente el señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, previo aviso a la Presidencia. Fue Ponente el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Firman los Ministros Presidente y Ponente con el Secretario General de Acuerdos que da fe.

P R E S I D E N T E:



MINISTRO GENARO DAVID GONGORA PIMENTEL.

SUPREMA C
JUSTICIA DE L
SECRETARIA GENERAL

P O N E N T E:

MINISTRO SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS:

LIC. JOSE JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ.



AMPARO DIRECTO EN REVISION: 2632/98.

96

Esta hoja forma parte del amparo directo en revisión 2632/98, promovido por Jorge Villalobos Torres, por unanimidad de diez votos, en el sentido siguiente: **PRIMERO.-** Se confirma la sentencia recurrida. **SEGUNDO.-** La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jorge Villalobos Torres, por su propio derecho, contra el acto que atribuyó a la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la sentencia de veinte de febrero de mil novecientos noventa y ocho, dictada en el toca de apelación 7/98. CONSTE.

JCRN/GMT.



CORTE DE
NACION.
DE ACUERDO

RECIBIDO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
29 SET. 1999
PARA NOTIFICACION EL

30 SET. 1999
Dentro de la resolución anterior a los interesados. Canal

SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA:
Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS
A OIR NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA DICHA NOTIFICACION.
POR MEDIO DE LISTA. DOY FE



SUPREMA
JUSTICIA DE
LA NACION